SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 21/2013

Recomendación N°	21/2013
Autoridad Responsable	Presidencia Municipal de Aquismón, S.L.P.
Expediente	1VQU-0403/2013
Fecha de emisión/	28 DE OCTUBRE DE 2013
HECHOS	
<p>El 23 de febrero de 2013, aproximadamente a las 02:00 horas, se suscitó una confrontación entre los asistentes a un evento social que se llevaba a cabo en las instalaciones de la galera de la comunidad de Tancuime, municipio de Aquismón, San Luis Potosí, lo cual motivó que intervinieran agentes de seguridad pública municipal que se encontraban comisionados en ese lugar.</p> <p>Con el propósito de disuadir la actitud de las personas que se enfrentaban entre sí, intervino V1 quien entonces ocupaba el cargo de Juez Auxiliar de la citada comunidad, y en determinado momento forcejeó con AR1, comandante de la Policía Municipal de Aquismón, quien portaba un arma de fuego, misma que accionó varias veces, y los proyectiles disparados ocasionaron la pérdida de la vida de V1 y lesiones a V2.</p> <p>En su testimonio, T1, mayul o policía comunitario, refirió que recibió indicaciones de V1, Juez Auxiliar, para vigilar la entrada del lugar donde se llevaría a cabo el baile, y que serían aproximadamente las 01:40 horas del 23 de febrero de 2013, cuando un elemento de la policía municipal se le acercó y sin motivo lo comenzó a jalonear, a lo cual se sumó otro policía y entre los dos lo tiraron al piso, y ya estando boca abajo lo comenzaron a patear en las costillas y en la cara. Agregó que uno de los policías tenía un arma color gris entre sus manos.</p> <p>Por su parte, V2 manifestó que el día de los hechos observó que unos policías uniformados que se encontraban en estado de ebriedad, estaban golpeando a T1, y que uno de los elementos, a quien identificó como AR1, sacó un arma de fuego que traía en la cintura y le disparó, lesionándolo en la oreja izquierda, y que se percató que AR1 volvió a accionar el arma de fuego, dándose cuenta que uno de los proyectiles causó una lesión a V1.</p> <p>En su testimonio, T2 señaló que se percató que los policías municipales que estaban comisionados en el lugar de los hechos se encontraban en estado de ebriedad, que portaban uniforme, que observó cuando AR1, con el arma de fuego sostenida entre sus manos, gritaba a la gente que no se acercaran ya que de lo contrario iba a disparar en su contra. Precisó que se dio cuenta cuando AR1 accionó el arma de fuego que portaba, en contra de V1.</p>	
Derechos Vulnerados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A la vida. ✓ A la integridad y seguridad personales.
OBSERVACIONES	
<p>Esta Comisión Estatal precisa que no se opone a la prevención y persecución de delitos por parte de las autoridades, sino a que con motivo de su combate se vulneren derechos humanos; por ello, hace patente la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas e investigar con los medios a su alcance los ilícitos que se cometen, a fin de</p>	

identificar a los responsables y lograr que se les impongan las sanciones que en derecho correspondan.

La actuación de toda autoridad debe tener como objetivo principal el respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos de cualquier persona; por tanto, esta Comisión hace hincapié en la necesidad de que los servidores públicos encargados de la seguridad pública y la procuración de justicia cumplan con el deber que les exige el cargo público, que lo realicen con la debida diligencia en el marco de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

También es importante hacer patente que esta Comisión Estatal no se pronuncia sobre las actuaciones realizadas dentro de la Causa Penal 1, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial, por carecer de competencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Asimismo, resulta pertinente enfatizar que a este Organismo Público Autónomo no le compete la investigación de los delitos, sino indagar sobre las posibles violaciones a derechos humanos, analizar el desempeño de los servidores públicos con relación a la denuncia sobre cualquier vulneración a los mismos, tomando en cuenta el interés superior de la víctima, se repare el daño causado, se generen condiciones para la no repetición de hechos violatorios, velar para que las víctimas o sus familiares tengan un efectivo acceso a la justicia, y en su caso, se sancione a los responsables de las violaciones que se hayan cometido.

La noche del 22 de febrero de 2012 se llevó a cabo un baile en la galera de la comunidad de Tancuime, con el propósito de recaudar fondos para el comité de caminos de la citada localidad. Como se precisa en el informe que proporcionó la autoridad señalada como responsable, así como de los testimonios que en la investigación del caso se recabaron, para llevar a cabo labores de vigilancia, se comisionó a AR1, entonces comandante de la Policía Municipal de Aquismón, quien se acompañó de otros siete elementos de la policía municipal.

De las declaraciones que sobre los hechos emitieron V2, T1, T2, T3, T4, T5 y T6, se advierte que aproximadamente a las 02:00 horas del 23 de febrero de 2013, se presentó una confrontación, en la cual intervinieron T1, quien fungía como mayul o policía comunitario, y elementos de la policía municipal de Aquismón. Ello dio origen a que en la misma intervinieran tanto V1, en su calidad de juez auxiliar de Tancuime, como AR1, en su carácter de comandante de la policía municipal.

Los elementos que al efecto se recabaron, así como los testimonios que rindieron las personas que estuvieron presentes en los hechos, concatenados entre sí, permiten advertir que AR1, portaba un arma de fuego, misma que sacó en determinado momento de la confrontación de los asistentes, y la accionó en varias ocasiones, provocando con ello, lesiones en una oreja a V2, y una lesión en el pecho a V1, misma que a la postre le produjo su fallecimiento.

Los testimonios de V2, T1, T2, T3, T4, T5 y T6 son claros en señalar que durante el transcurso del baile, vieron que AR1 traía fajada una pistola en la cintura. V2, es más preciso en su señalamiento, al manifestar que AR1 le

disparó de manera directa, logrando esquivar el disparo, pero que lo hirió en la oreja izquierda, para después lesionar en el pecho, con otro disparo, a V1. Se evidenció también que AR1, después de lesionar a V1 y V2, amagó a los presentes para que no lo detuvieran, y después se retiró del lugar llevando consigo el arma de fuego.

En la declaración que rindió AR1 ante la autoridad judicial, que consta en autos de la Causa Penal 1, manifestó que el día de los hechos, al ver que estaban golpeando a uno de sus elementos, se acercó y vio a una persona de complexión robusta que portaba un arma de fuego, por lo que intentó desarmarla, para lo cual forcejearon y se produjeron tres disparos, uno de los cuales lesionó a V1, situación que lo asustó, retirándose del lugar y después entregarse a la autoridad.

La versión que sobre los hechos emite AR1 no se encuentra soportada por otros datos que afirmen lo ocurrido, ya que de los testimonios se advierte que portaba el arma de fuego en la cintura desde su presencia en el baile que se llevaba a cabo. Aunado a lo anterior, de la prueba de rodizonato de sodio que se le practicó, se le encontraron elementos de deflagración de la pólvora, plomo y bario en la región dorsal y palmar de ambas manos, lo cual indica que disparó el arma de fuego, y la misma prueba que se le practicó a V1 resultó negativa.

Lo anterior también se corrobora con el informe que rindió el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Aquismón, en el cual se acompaña la versión de los hechos de AR3 y AR6, del cual se desprende que observaron el momento en que AR1 discutía con unas personas, que escucharon detonaciones de arma de fuego, y se percataron que AR1 corrió se subió a la patrulla y se retiró del lugar. Con ello, se constata que no existió un evento de forcejeó con V1, tal como AR1 lo manifestó en su declaración.

Como quedó asentado en el inicio de este capítulo de observaciones, sin pretender emitir argumentos o juicios de valor sobre la responsabilidad penal de AR1, lo cierto es que en su carácter de autoridad, teniendo el deber de garantizar la seguridad pública y respetar los derechos fundamentales, sin guardar los principios de razonabilidad o proporcionalidad, ni medios alternativos para la solución de conflictos, accionó un arma de fuego que lesionó a V1 y V2.

Ahora bien, del resultado de la necropsia que se practicó a V1, se advierte que presentó una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego, de 1.5 centímetros de diámetro, con halo de necrosis, en región supraclavicular izquierda, misma que correspondió a orificio de entrada, y que la causa de la muerte fue shock hipovolémico como consecuencia de esa lesión.

Por otra parte, constan los testimonios vertidos por T1 y T5, relativos a manifestar que cuando se presentaba la discusión entre los mayules y los policías municipales, observaron que AR1 sacó el arma que traía fajada en el lado derecho de la cintura y que disparó en una ocasión, y que el proyectil pasó rozando la oreja izquierda de V2, por lo que éste sólo se llevó las manos a la herida para intentar detener el sangrado.

Lo anterior coincide con el resultado de la certificación médica realizada a V2, por parte del médico legista de la Subprocuraduría Especializada para la Atención de Pueblos Indígenas, quien determinó que V2 presentaba una cicatriz antigua, de 0.8 centímetros en dorso de mano izquierda y un golpe contuso en el cuello.

En efecto, de los elementos que se aportaron al expediente de queja, no se advirtió que en el caso haya existido razonabilidad o proporcionalidad para el uso de las armas de fuego, si bien los testimonios refieren que en ese momento se estaba suscitando una riña entre los habitantes de la comunidad, quienes solicitaron la presencia de sus autoridades comunales, también hacen referencia a que sin existir mayor motivo, AR1 sacó el arma de fuego que portaba, misma que disparó en tres ocasiones, privando de la vida a V1.

En este caso, resulta cuestionable que AR1 haya disparado un arma de fuego, ya que no existió evidencia de que la víctima, o en su caso, los participantes de la confrontación hayan pretendido agredirlo, e incluso, no se encontraron elementos que permitan advertir que V1 haya atacado a AR1, o que éste se encontraba ante un peligro inminente que atentara contra su integridad o su vida o la de terceras personas, sino que al contrario, mediante el uso innecesario e irracional accionó un arma de fuego que causó la muerte de V1 y lesiones a V2.

En este sentido, si bien es cierto que los servidores públicos encargados de hacer cumplir la Ley, son garantes de la seguridad pública, la cual tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, también lo es que primeramente tienen el deber de apegarse orden jurídico y respetar los derechos humanos, lo que en el presente caso no aconteció.

Es de resaltar que la actuación de los cuerpos de seguridad debe estar sujeta al respeto de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues éstos constituyen el límite de la actuación de las autoridades, de ahí se deriva la necesidad de que cualquier acción de fuerza de los agentes del Estado proceda de un agotamiento previo de otras alternativas antes de proceder como se hizo en el presente caso, en el cual no se encontró evidencia de que AR1 haya emitido llamados, como medio alternativo, para disuadir la conducta de las personas que se estaban confrontando.

Cabe citar que el uso de armas de fuego resulta una medida extrema y excepcional, lo que sólo es aceptable cuando los estímulos externos recibidos por el agente no dejan otra opción, ya sea para proteger la propia vida, la de terceros o prevenir o detener mayores daños, y que se utilizarán en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir a la fuerza, como lo establecen los numerales 4, 6 y 9, de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, lo cual en los hechos que aquí se mencionan no aconteció.

Por lo expuesto, como resultado de la conducta que desplegó AR1, así como la omisión de los agentes de policía municipal que lo acompañaron el día de los hechos y que facilitaron que se retirara del lugar, se vulneró el derecho a la vida de V1, previsto en los artículos 1, párrafos primero, 14, párrafo segundo, 19, último párrafo y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y I, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en los cuales se reconoce el derecho de toda persona a que se respete su vida y que nadie puede ser

privado de ella arbitrariamente.

Tampoco se observaron los artículos 1, párrafo primero, 14, párrafo segundo, 21 párrafo noveno, y 22 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 5, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en términos generales refieren que las personas gozarán de los derechos humanos, que nadie podrá ser privado de sus derechos, que se respete su integridad y seguridad corporal, que nadie podrá ser sometido a maltratos físicos ni psicológicos, y que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

En otro aspecto, si bien una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la actuación irregular, consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 de la Ley General de Víctimas, y 7, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, señalan la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, formule una recomendación que incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños que se hubieran ocasionado.

Como criterio orientador sobre el contenido de una reparación integral, sirven como guía los Principios y Directrices Básicos Sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados el 16 de diciembre de 2005 mediante la resolución 60/147 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la cual señala que la reparación de los daños sufridos tendrá como finalidad promover la justicia y remediar las violaciones, que deberá ser efectiva y tomar en cuenta la indemnización, la satisfacción y la garantía de no repetición.

En razón de ello, con el propósito de evitar que hechos como los analizados en el presente caso se repitan, es necesario que la autoridad municipal impulse la capacitación a sus servidores públicos encargados de la seguridad pública, orientada hacia el correcto ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, tomando en consideración la importancia de la profesionalización de sus cuerpos de seguridad, sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Resulta también necesario que los agentes de la policía municipal, conozcan las disposiciones legales que permiten el uso de las armas de fuego y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento en que deban decidir acerca de su uso, posean los elementos de juicio para hacerlo.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se proceda a la reparación del daño en favor de los familiares de V1, o de quien acredite tener derecho, que se traduzca en una compensación justa y equitativa.

SEGUNDA. Gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se proceda a la reparación del daño en favor de V2 dentro de la cual se incluya el tratamiento médico y psicológico necesario para restablecer la salud física y emocional.

TERCERA. Se de vista a la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, a efecto que se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos, en razón de las consideraciones vertidas en la presente Recomendación.

CUARTA. Gire instrucciones para que diseñe y aplique un programa de capacitación y adiestramiento sobre derechos humanos, uso de la fuerza pública y el empleo de armas de fuego, así como de los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego.